

Economía

El aumento del gasto militar pone a prueba los límites del Estado del bienestar

Subir impuestos, recortar otras políticas o endeudarse se vislumbran como las principales alternativas para financiar el rearme que pide la OTAN

LAURA DELLE FEMMINE
MADRID

El mapa geopolítico ha vuelto a temblar con los bombardeos estadounidenses sobre Irán y su respuesta a las bases estadounidenses en Qatar. El seísmo amenaza con propagarse a la cumbre de la OTAN que empieza este martes en un clima ya tenso. Los socios de la Alianza Atlántica llegan a la cita en La Haya tras días de tirantes a cuenta de las metas para alcanzar en gasto en defensa, en los que España ha sido protagonista: el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se ha opuesto a que la inversión militar alcance el 5% del PIB, el objetivo que ha puesto sobre la mesa la Administración de Donald Trump, y que supone tres puntos más con respecto a la hoja de ruta marcada previamente. El presidente español ha tachado el objetivo de "desconsiderado", "innecesario" e incompatible con el Estado del bienestar, explicitando una pregunta que ya llevaba tiempo sobrevolando: ¿hasta dónde debe llegar el compromiso con la seguridad y cuándo su aumento amenaza el resto de los servicios públicos?

El dilema no es exclusivo de España y tiene que ver con que la guerra también se libra en los balances. El aumento de la inversión militar tiene que articularse a la vez que se atienden otras políticas públicas y se garantiza la sostenibilidad de las cuentas, con la limitación de que los recursos públicos no son infinitos. El margen puede elevarse si la economía crece o se encuentran otras vías de ingresos, generalmente impuestos, y también existe la posibilidad de reorganizar otras partidas presupuestarias para fortalecer determinadas áreas con los créditos de rúbricas que han quedado sin ejecutar. Pero los recursos públicos no dejan de parecerse a una

manta: si se tira de un extremo, existe el riesgo de dejar al descubierto el otro lado de la cama o de hacer un agujero, y hay epígrafes que arrastran la cubierta con fuerza.

El gasto social, que incluye las pensiones, junto a la sanidad, la educación y algunos servicios públicos representan los pilares del Estado del bienestar por el que el Viejo Continente ha apostado con decisión hasta convertirlo en parte de su ADN. Este paraguas se ha ido haciendo cada vez más grande y requiere el grueso de los recursos públicos: en España, las políticas sociales acaparon seis de cada diez euros del último presupuesto del Estado aprobado, correspondiente a 2023 —las cuentas están prorrogadas desde entonces—, y las previsiones auguran una curva de gasto ascendente por el envejecimiento de la población. La tendencia es la parecida en el resto de economías que han elegido el mismo modelo y comparten desafíos similares, puesto que la pirámide demográfica se está invirtiendo y hay otros retos en el horizonte, con el cambio climático a la cabeza.

La OTAN tenía fijado un objetivo de inversión en defensa del 2% del PIB para 2030, pero el reseteo en el tablero geopolítico provocado por los conflictos en Ucrania y Oriente Medio, junto a la vuelta de Trump a la Casa Blanca, han empujado hacia arriba el listón. Washington exige un 5% y la Alianza Atlántica ha abrazado la nueva meta, proponiendo un 3,5% del PIB en inversión militar y otro 1,5% para gastos relacionados con la defensa para 2035. España se opuso la semana pasada a esta subida y aseguró que había pactado una flexibilización de los objetivos, pero en el mismo giro que está teniendo el debate en los últimos



La ministra de Defensa, Margarita Robles, en una visita a la Brigada Guzmán el Bueno, en Cerro Muriano (Córdoba). EFE

El dilema no es solo de España, ya que la guerra se libra también en los balances

La política social acaparó seis de cada diez euros del último Presupuesto

meses, el secretario general de Alianza Atlántica, Mark Rutte, lanzó un nuevo desafío: el lunes pidió a España una inversión de al menos un 3,5% en defensa.

Actualmente, ningún país de la Alianza destina el 5% de su PIB a inversión militar. Tampoco lo cumple EE UU (3,38% del PIB en 2024, según la OTAN). Polonia es el aliado que más se acerca, con un 4,12%, frente a la media del 2,71% del total del bloque. Europa, que durante décadas ha externalizado a Estados Unidos su estrategia de defensa y seguridad, luce un porcentaje muy inferior: cerca del 2% del PIB en promedio y con mucha heterogeneidad entre socios.

España es de los países más rezagados: en 2024 invirtió menos del 1,3% del PIB en defensa. Aunque en los últimos meses ha pisado el acelerador —redirigiendo ingentes cantidades del presupuesto y anunciando planes de inversión millonarios— para acercarse al 2%, pero queda

mucho camino por recorrer y pocas vías para financiarlo. "Solo veo tres maneras para subir la inversión en defensa: financiarlo con deuda, ya sea europea o nacional, subir los impuestos o recortar el gasto", resume Raymond Torres, director de Coyuntura de Fincas.

Excedentes

Otra vía es aprovechar los excedentes del crecimiento económico. Es cierto que España crece con más vigor que el resto de economías avanzadas, y eso ensancha algo la manta. Pero el ritmo no es suficiente para asegurar un incremento millonario en la inversión en defensa y seguridad. Un alza de los desembolsos hasta el 5% del PIB supondría inyectar unos 80.000 millones al año a esta partida, algo menos de lo que se destina a sanidad y cerca de la mitad del gasto en pensiones, la rúbrica que más pesa en los presupuestos anuales.

"Aunque depende del horizonte temporal, no veo viable que la inversión en

defensa llegue al 5% del PIB. Incluso para alcanzar el 2% hace falta algo más que crecimiento", insiste Torres. "Veo difícil que Europa lo financie con deuda mancomunada, tanto por razones técnicas como políticas y presupuestarias", detalla. Incrementar los ingresos con subidas de impuestos también tiene un coste, sobre todo político. "Los ingresos públicos de España sobre el PIB están por debajo de la media europea y habría algo de margen, pero es muy impopular", añade el economista. La tercera opción, reducir el gasto, se vislumbra también complicada y tiene el riesgo de percibirse como una dicotomía entre inversión en defensa y gasto social: "Puede generar problemas de cohesión".

En este encaje de bolillos hay que tener en cuenta también las dinámicas internas. Las formaciones a la izquierda del PSOE son reacias a elevar los compromisos en defensa, y las tramas de corrupción destapadas